

Expediente N°: E/02594/2015

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la entidad **DESENVOLUPAMENT DILER S.L.** en virtud de denuncia presentada por D. **A.A.A.** y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de marzo de 2015 tiene entrada en esta Agencia escrito remitido por D. **A.A.A.** (en adelante el denunciante), comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de un sistema de cámaras instalado en la finca sita en **POLÍGONO **, PARCELA **, (C/.....1)** de **LÉRIDA**, cuyo titular es la mercantil **DESENVOLUPAMENT DILER S.L** (en adelante el denunciado).

En su escrito el denunciante manifiesta: *“La instalación de una cámara con movimiento en la parte posterior de la parcela colindante, que capta imágenes de su propiedad y del camino vecinal, resultando identificables tanto los vehículos como las personas que transitan por éstos. Se desconoce el uso y tratamiento dado a las imágenes. No consta fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos.”*

Adjunta a su denuncia reportaje fotográfico.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 6 de mayo de 2015 se solicita información al titular del sistema, teniendo entrada en esta Agencia escrito con fecha 10 de junio de 2015 en el que manifiesta:

El sistema de cámara localizado en su propiedad no está equipado de instalación alguna, por lo que no capta imágenes.

Se adjunta copia de la factura de compra, de fecha 23 de febrero de 2015, en la que consta la adquisición de una cámara modelo 800L-OFCSM-BFM800 (**Doc.1**).

El sistema se instaló con fines meramente disuasorios, a raíz de un robo producido en la finca.

Al respecto, aporta copia de la denuncia interpuesta con fecha 14 de enero de 2015 ante la DGP, Mossos d'Esquadra (diligencia nº ****/2015 XXX) (**Doc.2**).

2. Con fechas 17 de junio y 12 de agosto de 2015 se solicita al titular del sistema información complementaria, resultado la primera notificación no atendida y la última devuelta por el servicio de Correos con la indicación de “AUSENTE”.
3. Con fecha 11 de septiembre de 2015 se solicita colaboración a la

GUARDIA URBANA LLEIDA con objeto de realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar los aspectos señalados del sistema, teniendo entrada en esta Agencia escritos con fechas 24 y 28 de septiembre de 2015, en los cuales el Intendente Jefe de la Guardia Urbana de Lleida comunica:

*El representante de la empresa DESENVOLUPAMENT DILER S.L informa a los agentes actuantes que la mercantil tiene su sede en (C/.....2), **LLEIDA**. Además, dispone de una vivienda particular en el **POLÍGONO ****, **PARCELA ****, (C/.....1) de **Lleida**.*

Los agentes constatan la existencia de dos carteles informativos de cámaras de videovigilancia ubicados en la fachada de la vivienda, según se indica en el reportaje fotográfico adjunto.

El sistema instalado está compuesto por dos cámaras fijas, sin capacidad de movimiento, localizadas respectivamente, según se indica en el plano de situación adjunto, en las siguientes zonas:

- o Cámara C1: fachada de la vivienda, paralela al camino particular denominado "XXXXX".*
- o Cámara C2: fachada lateral de la vivienda, perpendicular al camino denominado "XXXXX" y colindante con la finca sita en (C/.....1) con nº identificativo *****.*

Al respecto se acompaña reportaje fotográfico del sistema y copias de las facturas de compra de dos cámaras, facilitadas por el representante de la mercantil denunciada.

Los agentes actuantes comprueban que las cámaras no se encuentran conectadas a ningún suministro eléctrico u análogo, por lo que no son susceptibles de captar ningún tipo de imagen. Tienen meramente un carácter disuasorio.

*No obstante, se acompañan fotografías de las vistas panorámicas de las fachadas en las que se ubican las cámaras, describiendo las áreas que podrían grabar en el caso de que dispusieran de capacidad de captación de imágenes. Así, la cámara C1 recogería un área de fachada de la vivienda y parte del camino "XXXXX" adjunto a la misma y la cámara C2 captaría en su caso el interior de la propia propiedad, no alcanzando la finca adyacente señalada en el plano con el nº *****.*

Se adjunta reportaje fotográfico descriptivo y acreditativo, en relación a la inoperatividad del sistema y posibles áreas captadas en caso de funcionamiento.

4. Con fecha 9 de septiembre de 2015, mediante diligencia de inspección se consulta la inscripción de la sociedad **DESENVOLUPAMENT DILER S.L** en el Registro Mercantil Central.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo, procede situar la materia de videovigilancia en su contexto normativo. Así el artículo 1 de la LOPD dispone: *“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”*

En cuanto al ámbito de aplicación de la LOPD, el artículo 2.1 de la misma señala: *“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”*, definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como *“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas *“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”*.

El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal *“toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”*. Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquella.

La Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de los datos con fines de videovigilancia señala que: *“La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la*

sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático". Sigue señalando: "Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999..."

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.

Por su parte, la citada Instrucción 1/2006, dispone en su artículo 1.1 lo siguiente:

"1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma."

La Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente:

"1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia."

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable, por lo que la imagen de una persona física identificada o identificable constituye un dato de carácter personal.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los afectados por este tipo de tratamientos y, a efectos de la LOPD, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta concierne a personas que las hacen identificadas o identificables y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad

desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere.

III

En el caso que nos ocupa, se denuncia por D. **A.A.A.** la posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de un sistema de cámaras instalado en la finca sita en **POLÍGONO **, PARCELA **, (C/.....1)** de **LÉRIDA**, cuyo titular es la mercantil **DESENVOLUPAMENT DILER S.L.**

En su escrito el denunciante manifiesta: *“La instalación de una cámara con movimiento en la parte posterior de la parcela colindante, que capta imágenes de su propiedad y del camino vecinal, resultando identificables tanto los vehículos como las personas que transitan por éstos. Se desconoce el uso y tratamiento dado a las imágenes. No consta fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos.”*

Así, solicitada información al denunciado, por parte de los Servicios de Inspección de esta Agencia, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, el mismo manifiesta que el sistema de cámara localizado en su propiedad no está equipado de instalación alguna, por lo que no capta imágenes. El sistema se instaló con fines meramente disuasorios, a raíz de un robo producido en la finca.

Ante dichas manifestaciones, la Inspección de Datos de esta Agencia solicita la colaboración a la GUARDIA URBANA LLEIDA con objeto de realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar los aspectos señalados del sistema de videovigilancia denunciado, teniendo entrada en esta Agencia escritos con fechas 24 y 28 de septiembre de 2015, en los cuales el Intendente Jefe de la Guardia Urbana de Lleida comunica, entre otras cosas :

*El representante de la empresa DESENVOLUPAMENT DILER S.L informa a los agentes actuantes que la mercantil tiene su sede en (C/.....2), L LLEIDA. Además, dispone de una vivienda particular en el POLÍGONO **, PARCELA **, (C/.....1) de Lleida.*

Los agentes constatan la existencia de dos carteles informativos de cámaras de videovigilancia ubicados en la fachada de la vivienda, según se indica en el reportaje fotográfico adjunto.

El sistema instalado está compuesto por dos cámaras fijas, sin capacidad de movimiento, localizadas respectivamente, según se indica en el plano de situación adjunto, en las siguientes zonas:

- o Cámara C1: fachada de la vivienda, paralela al camino particular denominado “XXXXX”.*
- o Cámara C2: fachada lateral de la vivienda, perpendicular al camino denominado “XXXXX” y colindante con la finca sita en (C/.....1) con nº identificativo *****.*

Al respecto se acompaña reportaje fotográfico del sistema y copias de las facturas de compra de dos cámaras, facilitadas por el representante de la mercantil denunciada.

Los agentes actuantes comprueban que las cámaras no se encuentran conectadas a ningún suministro eléctrico u análogo, por lo que no son susceptibles de captar ningún tipo de imagen. Tienen meramente un carácter disuasorio.

*No obstante, se acompañan fotografías de las vistas panorámicas de las fachadas en las que se ubican las cámaras, describiendo las áreas que podrían grabar en el caso de que dispusieran de capacidad de captación de imágenes. Así, la cámara C1 recogería un área de fachada de la vivienda y parte del camino "XXXXX" adjunto a la misma y la cámara C2 captaría en su caso el interior de la propia propiedad, no alcanzando la finca adyacente señalada en el plano con el nº *****.*

Se adjunta reportaje fotográfico descriptivo y acreditativo, en relación a la inoperatividad del sistema y posibles áreas captadas en caso de funcionamiento.

Por lo tanto, a la vista del informe emitido por el citado cuerpo de Policía se constata que las dos cámaras que componen el sistema, no se encuentran conectadas por lo que no pueden captar o grabar imagen alguna.

Sobre esta cuestión debe señalarse que el Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada que al Derecho Administrativo Sancionador le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia. La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta "que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio". De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en lo sucesivo LRJPAC), establece que "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia."

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de inocencia "no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo."

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que "Nuestra

doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y el principio jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.”

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor.

En el presente caso, al tratarse de cámaras que no se encuentran conectadas ni operativas, no captarían imágenes de personas físicas identificadas o identificables, por lo que, al no quedar acreditada la existencia de un tratamiento de datos personales, la cuestión se encuentra al margen de la normativa de protección de datos. Por consiguiente es de aplicación el principio de presunción de inocencia, pues de la mera existencia de una cámara de videovigilancia no se desprende automáticamente que la misma funcione y que por tanto capte imágenes de personas y, en consecuencia, que exista un tratamiento de datos personales y no consta en el expediente indicio alguno de que dicho tratamiento se está llevando a cabo.

Alcanzada la conclusión anterior, es conocido que en otros supuestos similares esta Agencia ha venido considerado que la instalación de dispositivos que generaban la apariencia de que habían sido instaladas cámaras de videovigilancia que, en su caso, podrían ser susceptibles de ser puestas en funcionamiento, con el consiguiente tratamiento de datos personales, podía generar una situación de alarma entre las personas, que entendían que eran vigiladas a través de dichos dispositivos, al producirse una apariencia de tratamiento. Teniendo esto en cuenta, y aun cuando por esta Agencia se acordaba el archivo del expediente en cuestión, se requería igualmente la retirada del dispositivo.

Sin embargo, esta Agencia considera necesario revisar el mencionado criterio, en los términos que se plasman en la presente resolución. De este modo, la inexistencia de prueba alguna acerca de un posible tratamiento de datos de carácter personal implica que la presente resolución de archivo no incorpore ningún tipo de requerimiento en el sentido que se ha mencionado, al prevalecer el principio de presunción de inocencia.

En todo caso, lo antedicho no impide que si constase acreditado en el futuro el tratamiento de los datos a través de la grabación de las imágenes o su visualización en tiempo real, esta Agencia pueda adoptar las medidas y llevar a cabo las actuaciones que procedan en virtud de las competencias que a la misma otorga la LOPD, a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

NOTIFICAR la presente Resolución a **DESENVOLUPAMENT DILER S.L.** y a D. **A.A.A.** .

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Mar España Martí

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos